Renovar el Constitucional

LA VANGUARDIA, editorial, 24.05.08

AUNQUE medio marginada por el ensordecedor ruido mediático que generan la lucha por el poder en el Partido Popular y la importante desaceleración económica, la reforma de la justicia, junto con la renovación obligada del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, sigue siendo uno de los objetivos inexcusables de la presente legislatura, reforma que convendría que no se demorara. Nos jugamos en ello algo tan importante como la salud democrática.

La necesidad de acometer aquella renovación de las máximas instituciones judiciales se ha visto potenciada si cabe por la súbita muerte de un magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García Calvo. Una vacante que se une a las cuatro plazas que deberían haberse renovado el pasado diciembre, lo cual está pendiente del acuerdo entre PSOE y PP. La desaparición de García Calvo, un juez claramente posicionado en contra del Estatut de Catalunya, cuya constitucionalidad está analizando el Alto Tribunal, ha provocado un cambio en la posibilidad de una sentencia más a favor de las tesis del Gobierno y de Catalunya que del recurso presentado por el PP, partido que hasta ahora se había resistido a la renovación por aquella circunstancia favorable.

El Tribunal Constitucional es una columna vertebral del sistema democrático. Es más, cuando en el futuro los historiadores analicen el proceso de transición y consolidación de la democracia en España, concederán sin lugar a dudas a esta institución un papel trascendental en la formación de un Estado político moderno como el que disponemos

ahora. Sabedores de ese papel, hemos alertado reiteradamente desde esta columna sobre el uso espurio, por partidista, que se ha querido hacer del Constitucional en la pasada legislatura, hasta el punto de presentar recusaciones contra magistrados con el único objetivo de intentar que la composición del tribunal se inclinara hacia una u otra posición. Una perversión del sistema que el propio tribunal criticó en una de sus decisiones contra una recusación del PP.

Mientras el Constitucional prosigue con sus trabajos, incluido el estudio del Estatut, para no demorar más decisiones importantes, PSOE y PP deben realizar un esfuerzo por cerrar el acuerdo que permita renovar los citados cuatro magistrados, así como designar la persona que debe ocupar la vacante dejada por García Calvo. Sería la forma de consolidar el prestigio que la institución ha puesto en serio riesgo de dilapidar por la irresponsabilidad política de algunos.